

 **realidad
económica**

Nº 324 • AÑO 48

16 de mayo al 30 de junio de 2019

ISSN 0325-1926

Páginas 33 a 68

DEBATES

¿Desarrollismo o neoliberalismo? Una economía política del macrismo*

Andrés Wainer**

* Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto PICT 2016-3306 "Condiciones estructurales, macroeconómicas y sectoriales y sus manifestaciones en el sector externo", que cuenta con el patrocinio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Se agradecen los valiosos comentarios de Martín Schorr. Desde ya, los errores y omisiones que pudieran existir son de exclusiva responsabilidad del autor.

** Doctor en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magíster en Economía Política (FLACSO). Investigador del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO, Tucumán 1966 (C1050AAN) C.A.B.A. Argentina. andres.wainer@gmail.com

RECEPCIÓN DEL ARTÍCULO: abril de 2018

ACEPTACIÓN: octubre de 2018



Resumen

Este artículo se propone intervenir en el debate sobre la caracterización del gobierno que asumió el poder en la Argentina en diciembre de 2015. Mientras que desde la oposición en general se lo ha calificado como neoliberal, desde el oficialismo se autodenominan como desarrollistas. A diferencia de otros trabajos que se dedicaron a abordar esta cuestión a partir de considerar el origen socioeconómico de los principales funcionarios, en este artículo se realiza un análisis de economía política de los primeros dos años del gobierno de la alianza Cambiemos. Para ello se buscó determinar qué conjunto de “ganadores” y “perdedores” dejó la política económica adoptada, cuál ha sido el comportamiento de las principales fracciones del capital frente al nuevo escenario y cuáles son algunas de las principales dificultades que tiene el gobierno para lograr un proceso inversor que le permita garantizar el desarrollo económico del país.

Palabras clave: Macri – Neoliberalismo – Desarrollismo – Argentina – Clases sociales

Abstract

Developmentalism or neoliberalism? A political economy of Macri's government

This article is part of the debate over the characterization of the government that took over the administration of Argentina in December 2015. While the political opposition has described it as neoliberal, the ruling party calls itself “developmentalist”. Unlike other works that were dedicated to address this issue considering the socioeconomic origin of the main officials, this article is based on a political economy analysis of the first two years of the government of Cambiemos. For this purpose, it aims to identify “winners” and “losers” with the government's economic policy. It also describes the behavior of the main capital fractions in the new scenario. The paper ends by presenting some of the main difficulties that the government should sort to achieve a big investment process that could lead to the country's economic development.

Keywords: Macri – Neoliberalism - Developmentalism – Argentina – Social classes

“Macri no es neoliberal sino un desarrollista y un constructor que viene de una familia de trabajo, no viene de una familia financiera, comparte la idea de que el motor de la actividad económica tiene que ser la inversión y no el consumo”
(Miguel Bein, *La Gaceta Mercantil*, 02/07/2016)

“(el actual gobierno) no se trata de una derecha ni ‘moderna’ ni ‘progresista’ ni ‘pos-neoliberal’; se trata lisa y llanamente de un gobierno neoliberal ‘clásico’”
(Axel Kicillof y Carlos Bianco, *Diario Perfil*, 8/10/2017)

Introducción

Tras doce años en los que se sucedieron tres gestiones kirchneristas consecutivas, en diciembre de 2015 asumió en la Argentina una nueva coalición de gobierno encabezada por Mauricio Macri. La caracterización de un gobierno siempre resulta una tarea compleja y sujeta a disputas dado que la misma nunca es ajena a valoraciones político-ideológicas. Esta tarea es aún más difícil cuando se trata de un proceso todavía en marcha, inacabado. Mientras que la mayoría de los opositores políticos han caracterizado al gobierno de la alianza Cambiemos como *neoliberal*, el presidente se encargó en reiteradas ocasiones de presentarse como un *desarrollista*, llegando incluso a citar al máximo exponente de dicha corriente en su acto de asunción¹.

En los relativamente pocos trabajos que se dedicaron a analizar esta cuestión al momento de escribir estas líneas, ha predominado una caracterización del gobierno basada fundamentalmente sobre el personal que ha venido ocupando los cargos políticos más altos de los principales aparatos del Estado (Canelo & Castellani, 2017a; CIFRA, 2016). Estos estudios han detectado una gran cantidad de funcionarios provenientes del mundo empresario en altas posiciones de gobierno, a

¹ “Arturo Frondizi dijo una vez: por su magnitud, el desafío que nos aguarda no es cosa de una persona ni de un grupo de personas; es tarea de todo el pueblo argentino e implica también una responsabilidad compartida por todos. Lo cito porque creo profundamente en esas palabras” (Discurso inaugural de Mauricio Macri como presidente de la Nación, 10/12/2015)

partir de lo cual se ha caracterizado al de la alianza Cambiemos como un gobierno de gerentes o “CEOs” (por Chief Executive Officer)². Este tipo de análisis suele vincular la orientación de clase de un determinado gobierno con los intereses particulares de sus principales funcionarios. La máxima expresión de la penetración de los intereses privados en el gobierno sería la existencia de una “puerta giratoria” entre el mundo de los negocios y el mundo de la política, es decir, gerentes, empresarios o dirigentes empresariales que pasarían de la actividad privada a la gestión pública o viceversa, generándose un potencial conflicto de intereses³.

Estos trabajos han permitido avanzar en el análisis de algunas dimensiones políticas del gobierno de Cambiemos pero dicha aproximación parece insuficiente para establecer una caracterización social del mismo. El origen socioeconómico del personal de gobierno puede generar una mayor empatía de la clase dominante con el mismo, pero ello no implica un apoyo incondicional ni tampoco que se vayan a llevar adelante todas las demandas del conjunto del empresariado. Como tampoco debería deducirse que un presidente de origen popular o que no provenga del mundo empresario va a llevar adelante políticas más favorables a los sectores menos favorecidos. No alcanzaría el espacio de este artículo para mencionar todos los casos en los que gobiernos conducidos por personal relativamente ajeno al “mundo de los negocios” han aplicado políticas muy favorables a las fracciones más concentradas del capital y perjudiciales para las mayorías. Es por ello que no deben sacarse conclusiones taxativas sobre el carácter de un gobierno remitiéndose únicamente al origen social de los políticos. Como afirmaba Marx, lo importante no es tanto el origen social de los funcionarios de gobierno sino el hecho de que se planteen teóricamente los mismos problemas a los que se enfrentan los capitalistas en la práctica (Marx, 2000).

² Incluso algunos periodistas como Alfredo Zaiat del periódico Página 12 han caracterizado al régimen político establecido en diciembre de 2015 como una “CEOcracia” (Zaiat, 2015).

³ La expresión “puerta giratoria” (revolving door) fue acuñada en la legislación norteamericana y se utiliza para describir el flujo de personas que ocupan altos cargos en el sector público y en el privado en distintos momentos de sus trayectorias laborales. Ese flujo puede darse en varias direcciones: a) altos directivos del sector privado que acceden a puestos relevantes en el sector público; b) funcionarios que al dejar su cargo público son contratados en el sector privado para ocupar cargos directivos; o c) individuos que ocupan alternativamente altos cargos en el sector privado y en el sector público. Al respecto consultar Canelo & Castellani (2017b).

Existen también unas pocas e incipientes caracterizaciones del gobierno de Cambiemos a partir de las medidas tomadas tras el recambio gubernamental y la trayectoria de los distintos sectores económicos. Este es el caso del trabajo de Cantamutto y Schorr, quienes en un sucinto artículo remarcan el carácter aperturista y desregulador del gobierno, lo que depararía un severo ajuste social (Cantamutto & Schorr, 2017). Al mismo tiempo, los autores señalan que las políticas económicas llevadas adelante por el gobierno de Cambiemos favorecieron a un puñado de rubros entre los cuales se encuentran el sector agropecuario, la intermediación financiera, la explotación de minas y canteras y la prestación de servicios públicos, mientras que se habrían visto perjudicadas las actividades de la construcción y la industria manufacturera. Para ello se basan sobre cuáles son las actividades que aumentaron o disminuyeron su participación en el valor agregado.

Este tipo de análisis necesitan ser profundizados, dado que hasta el momento se trata de trabajos parciales y acotados, tanto por su formato (en su mayoría se trata de artículos breves de divulgación) como por el período temporal que abarcan (a lo sumo el primer año de gobierno de Cambiemos). Otros autores como Piva centran su análisis en el grado de ruptura o continuidad del gobierno de Macri con el último de Cristina Fernández de Kirchner (Piva, 2017). Piva ofrece una imagen matizada en términos de contraste, dado que sostiene que las políticas aplicadas por Cambiemos representan un ajuste modesto en términos comparativos. Ello no tanto por falta de “voluntad” del gobierno, sino porque el ajuste no pudo ser plasmado en toda su intensidad debido a la resistencia presentada por la clase trabajadora⁴.

Más allá del “gradualismo” con el cual avanzaría el gobierno en sus intenciones de ajustar, Piva sostiene que el gobierno de Cambiemos es un intento de la clase dominante por superar su histórico comportamiento político económico–corpo-

⁴ “La principal diferencia entre 2016 y 2014 es cualitativa más que cuantitativa: el ajuste de 2016 se inscribe en el reinicio de una ofensiva contra los trabajadores. Pero el ‘gradualismo’ con el que avanzó el gobierno y los resultados alcanzados, apenas superiores a los de 2014, señalan las dificultades para desplegar esa ofensiva. Detrás de esas dificultades asoma una relación de fuerzas entre capital y trabajo que el gobierno solo ha modificado superficialmente. El ajuste, por lo tanto, aparece subordinado al logro de otros objetivos más ambiciosos” (Piva, 2017).

rativo. De esta manera, la orientación general de las políticas del gobierno de Macri, como las reformas laboral, tributaria y previsional, apuntarían tanto a objetivos de corto plazo -reducción del déficit fiscal e incremento de la inversión- como de largo plazo -reestructuración de las relaciones de fuerza entre capital y trabajo-, es decir, no responderían linealmente a ninguna fracción o agrupamiento empresario sino las necesidades del capital en su conjunto.

Coincidimos con Piva en que se trata de una ofensiva general del capital sobre el trabajo y que el gobierno trata de reorganizar a la burguesía en su conjunto. Sin embargo, esto no quita que la orientación de las políticas llevadas adelante por Cambiemos no defina un conjunto de ganadores y perdedores incluso dentro de la clase dominante. En efecto, la principal hipótesis del presente trabajo es que las medidas tomadas por el gobierno de Macri se enmarcan no sólo en una ofensiva sobre la clase trabajadora sino que también impulsan el reacomodamiento de las relaciones de fuerza entre las distintas fracciones capitalistas. Esto no se debería tanto a la afinidad ideológica de los funcionarios gubernamentales con ciertos sectores del “poder económico” como a las restricciones con las que opera un gobierno que busca encauzar la relación capital-trabajo dentro de las posibilidades que ofrece un país periférico y dependiente como el nuestro.

En definitiva, no se trata sólo de etiquetar al gobierno de Cambiemos como “neoliberal” o “desarrollista” sino de identificar el contenido de clase concreto del mismo a partir de los sujetos sociales sobre los que se sustenta y a los que potencia o, por el contrario, a quienes se propone subordinar.

Para ello, este trabajo se organiza de la siguiente manera. Luego de esta introducción, se realiza una breve caracterización del impacto de las principales medidas de política económica adoptadas por el gobierno de Macri en la relación capital-trabajo y en el comportamiento de la inversión. A continuación se indaga en los efectos que tuvieron dichas medidas en los precios relativos, contribuyendo a delimitar un conjunto de “ganadores” y “perdedores” entre los distintos sectores de actividad. En el siguiente apartado se procede a estudiar el comportamiento que tuvieron las distintas fracciones del capital en el nuevo contexto a partir de considerar la trayectoria seguida por los distintos sectores. En el anteúltimo apartado

se analiza el manejo que realiza la clase capitalista argentina del excedente apropiado y los condicionantes que impone la situación del sector externo. El artículo cierra con unas reflexiones finales en torno a la naturaleza del gobierno de Cambiemos y algunos de los límites y dificultades que enfrenta para llevar adelante su programa.

Una renovada ofensiva del capital sobre el trabajo

Las primeras medidas económicas tomadas por el gobierno de la alianza Cambiemos tras su asunción en diciembre 2015 estuvieron caracterizadas por un supuesto “sinceramiento” de la economía frente a los “desequilibrios” que habría acumulado durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015). Entre las medidas más destacadas se pueden mencionar: la derogación de las regulaciones cambiarias (el denominado “cepo”) y la consecuente devaluación de la moneda, la eliminación de las retenciones a la mayor parte de las exportaciones (trigo, maíz, carne, minerales) y la reducción de las mismas al principal producto de exportación (soja), la eliminación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y del régimen de consulta previa, la negociación y acuerdo con los principales fondos buitres (*holdouts*) que demandaron al Estado Argentino ante la justicia federal de Estados Unidos, un fuerte incremento de las tarifas de los servicios públicos (Cantamutto, 2016; Sabbatella, 2017), la dilatación de los tiempos de liquidación de divisas a exportadores -o directamente la supresión de la obligatoriedad de traerlas al país-, el aumento de la tasa de interés de referencia, el inicio de un acelerado ciclo de endeudamiento externo (Manzanelli, González, & Basualdo, 2017), el establecimiento de un régimen de participación directa del capital privado en el financiamiento de las obras públicas (PPP), una reforma previsional orientada a reducir el gasto en jubilaciones y pensiones, la liberalización de precios en el mercado de combustibles y el auspicio de la firma de convenios laborales con condiciones más “flexibles”.

Al analizar estas medidas parece desdibujarse la supuesta orientación “desarrollista” que se atribuye el propio gobierno y algunos de sus simpatizantes, ya que se trata en su mayoría de políticas liberalizadoras y desreguladoras, congruentes

con el ideario neoliberal⁵. El supuesto “desarrollismo” estaría dado porque la consecución de estos objetivos generaría una “lluvia de inversiones” que impulsaría un crecimiento económico sustentable en el largo plazo. Al respecto, el gobierno de Macri le ha otorgado un papel central a las inversiones extranjeras; si bien las empresas transnacionales que operan en el país se verían directamente beneficiadas por las medidas mencionadas dado que tienen una presencia predominante en los sectores más concentrados y dinámicos de la economía (A. Gaggero, Schorr, & Wainer, 2014; Schorr, 2018; Wainer & Schorr, 2014), se adoptaron además una serie de normas que apuntan específicamente al capital extranjero. Entre ellas se encuentran la eliminación de requisitos de permanencia mínima al ingreso de capitales del exterior, la sanción de una nueva ley de tierras, la redefinición del código minero, la priorización de jurisdicciones externas para la emisión de deuda pública y la firma nuevos tratados bilaterales de inversión (TBI). Asimismo, en una línea

⁵ Una de las pocas acciones con cierto tinte “desarrollista” por parte del gobierno de Cambiemos fue la introducción de un incentivo en las licitaciones de la segunda ronda del Plan Renovar (sancionado por ley en octubre de 2015) a una mayor integración nacional en las instalaciones electromecánicas, excluida la obra civil. El beneficio consistía en un certificado fiscal para los proyectos que incluyeran “componente nacional declarado” de al menos el 60%. Si bien el componente nacional aumentó del 11% de la Ronda 1 al 37% en la Ronda 2, en esta última se modificó la forma de medir el mismo para energía eólica, permitiendo el ensamblado con partes importadas de aerogeneradores y reconociendo el 100% como nacional (Cipibic). De esta manera, los datos sobre componente nacional de la Ronda 2 no reflejan cabalmente el nivel de integración local de las obras. Por otra parte, en mayo de 2018, es decir, con posterioridad a la finalización de la primera versión de este artículo, se sancionó la “Ley de compra argentino y desarrollo de proveedores” (Ley 27.437), que estableció un margen de preferencia del 15% para Pymes y del 8% para el resto de las empresas locales en las compras de organismos del Estado. Si bien esta medida fue bien recibida en general por empresarios locales, el proyecto fue muy cuestionado desde otros sectores debido a que la misma terminó anulando una ley anterior que tenía una orientación más favorable hacia las empresas nacionales. Según el especialista Bruno Capra “existe una legislación sobre el Compre Nacional que está vigente pero no se cumple, decreto ley 5.340 y la posterior ley 18.875, en la que tuvieron directa participación en su elaboración el economista Aldo Ferrer, el científico Jorge Sabato y el dirigente empresario Marcelo Diamand (...) en lo que hace el proyecto oficial, en vez de generar la forma de que se cumpla la ley vigente, la deroga y la reemplaza por otra muy inferior; en la anterior, el sentido era que el capital nacional fuera el protagonista del desarrollo impulsado por la contratación pública, y el capital extranjero participaba por defecto, cuando las empresas locales no podían responder, y como excepción; ahora no, en el proyecto del Ejecutivo la participación de la producción nacional es la excepción, lo marginal (...) las leyes originales no hablaban de preferencias, era una obligación dirigir la contratación al Compre Nacional, el desarrollo de la industria nacional estaba en la línea fundante del marco legal. En la nueva ley, el principio básico es el compre extranjero, y a partir de ahí presentar como excepcionalidad que se reserve una participación a la industria nacional” (Página 12, 10/06/2017).

similar se inscribe la “apuesta estratégica” de la administración Macri por suscribir un acuerdo de amplio espectro entre la Unión Europea y el Mercosur.

En definitiva, las medidas de política económica mencionadas buscan impulsar un proceso inversor -con un papel destacado del capital extranjero- facilitando la libre movilidad de capitales y generando mejores condiciones de rentabilidad a partir de una redistribución regresiva del ingreso. En relación con esto último, según un informe de CIFRA-CTA, la participación de los trabajadores en el ingreso cayó desde el 37,4% en 2015 al 34,3% en los tres primeros trimestres de 2016, lo que equivale a una transferencia de ingresos de 16.000 millones de dólares del trabajo al capital (CIFRA, 2017). Si bien no se cuenta con datos oficiales finales que permitan ver cómo evolucionó esta variable durante el año 2017, es muy probable que la misma se haya mantenido relativamente estable teniendo en cuenta la leve recomposición salarial del 2% promedio para los trabajadores del sector privado (CIFRA, 2018a). Esto se debió a que la cifra alcanzada en la mayor parte de las negociaciones paritarias fue similar o levemente superior a la inflación de dicho año, gracias a la capacidad de negociación de los sindicatos así como a la particularidad de que se trató de un año en el cual se celebraban las elecciones legislativas de medio término, para las cuales el gobierno pretendió mejorar su imagen de manera de poder consolidar su posición en el parlamento.

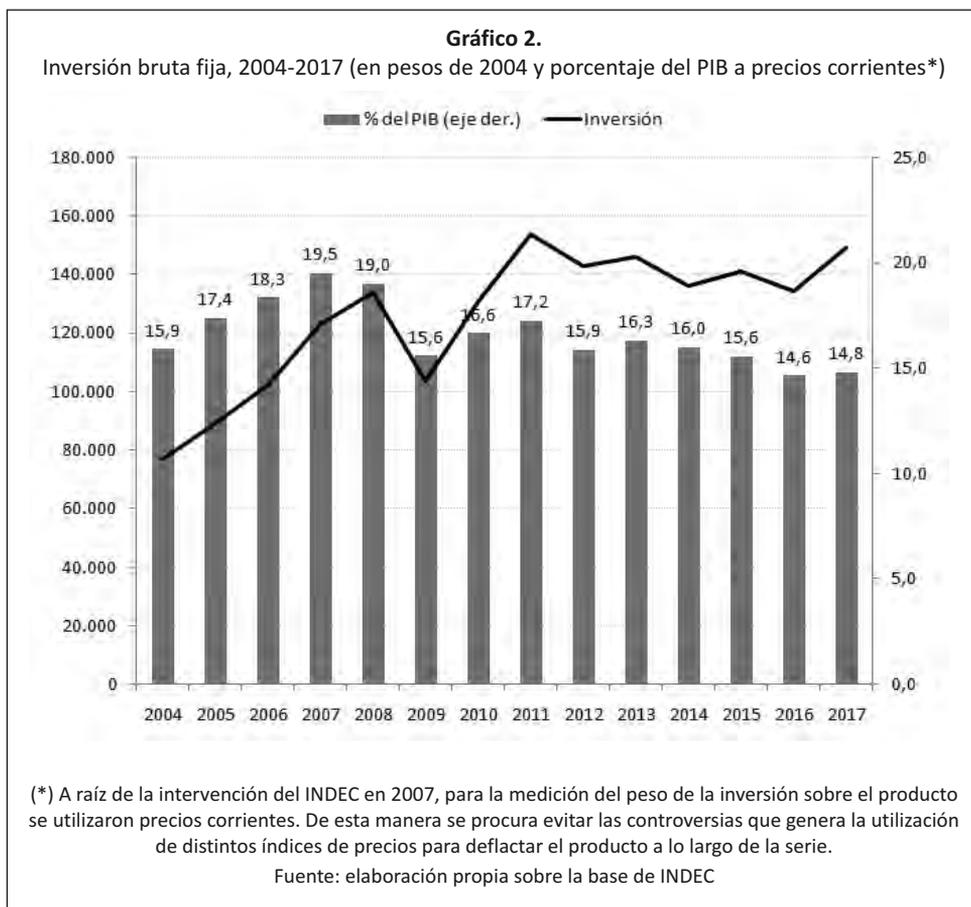
De todas maneras, tal como se puede apreciar en el **Gráfico 1**, la leve mejora salarial en 2017 no logró contrarrestar la pérdida sufrida por la clase trabajadora el año anterior en términos de ingresos (-6% promedio)⁶. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la situación del conjunto de los trabajadores fue peor aún ya que aquí solo se está considerando a los trabajadores del sector privado registrados, es decir, aquellos que poseen los niveles salariales más altos y que están en mejores condiciones para defender sus ingresos. En efecto, mientras que en diciembre de 2017 el salario de los trabajadores del sector privado fue un 4,2% inferior al de diciembre de 2015, en el caso del sector público dicha merma fue del 6,3% (CIFRA,

⁶ La situación empeoró significativamente para los asalariados en el último año. En mayo de 2018 el salario real promedio de los asalariados registrados del sector privado era un 5,4% menor que el de marzo del mismo año (CIFRA, 2018b). Dada la aceleración que registró la inflación desde mayo a partir de la fuerte devaluación que registró el peso, es esperable que la pérdida del poder adquisitivo del salario en el año sea aún mayor.



2018b). Cabe señalar que en ambos casos se está haciendo referencia a los trabajadores registrados, siendo que la situación de los no registrados suele ser peor por no contar con mecanismos formales de negociación colectiva ni protección legal alguna.

La reducción del costo laboral se suma así a las medidas desreguladoras tomadas por el gobierno de Cambiemos, las cuales suponen una confianza plena en el funcionamiento del mercado. En este sentido, a diferencia del desarrollismo -que buscaba direccionar las inversiones a partir de medidas intervencionistas que orientaran las mismas hacia sectores o regiones considerados estratégicos-, para la administración macrista las señales de precios a través del mercado son suficientes para que lleguen las inversiones al país. Sin embargo, al menos durante los dos primeros años del gobierno de Cambiemos, estas “señales” no parecen haber sido suficientes para inducir un “salto inversor” que genere un proceso de desarrollo económico sustentable (**gráfico 2**).



Como observa en el **gráfico 2**, la inversión bruta fija medida en precios constantes se contrajo 4,9% en 2016, mientras que se recuperó un 11,3% en 2017. A pesar de esta recuperación en el último año, la misma se mantuvo por debajo del nivel máximo alcanzado en 2011. Pero la debilidad del “salto inversor” se vuelve más evidente cuando se mide el peso que tiene la formación de capital sobre el conjunto de la economía. En este sentido, en 2017 la inversión representó el 14,8% del producto (medido a precios corrientes), el segundo menor valor de toda la serie luego del año 2016. Es decir, los dos años de gobierno de Cambiemos son los que

registran la menor proporción de formación de capital en relación con el producto desde 2004.

En economías subdesarrolladas como la nuestra la determinación de los precios por el mercado -es decir, con poca o nula intervención estatal-, puede generar un incremento de las ganancias pero ello no garantiza que se lleven a cabo inversiones que permitan el surgimiento de nuevos sectores. Por lo general, en países subdesarrollados los empresarios locales no invierten en ámbitos donde no hay experiencia previa (Furtado, 1964), mientras que las firmas transnacionales conservan la mayoría de las inversiones innovadoras en sus países de origen o bien en aquellos que cuentan con sistemas científico-tecnológicos consolidados. No existen experiencias históricas significativas que muestren un salto cualitativo -que represente un avance tecnológico y una mayor homogeneidad estructural- sin políticas públicas que orienten explícitamente las inversiones hacia sectores considerados estratégicos (Amsden, 2001; Chang, 2002). Incluso, el aumento de la inversión por sí solo, sin un direccionamiento, puede terminar agravando los desequilibrios que presenta una economía dependiente, sobre todo en lo que respecta al comportamiento del sector externo⁷.

En este sentido, el objetivo real de las medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos no parece haber sido la generación de las condiciones para lograr un desarrollo nacional sustentable sino más bien reducir el déficit fiscal primario para garantizar los pagos de la creciente deuda pública y maximizar la rentabilidad del capital en las condiciones preexistentes. Ello implica una nueva ofensiva del capital sobre el trabajo, asumiendo como incuestionables las limitaciones propias de una economía periférica y dependiente.

De aquí se pueden inferir algunos elementos explicativos del amplio apoyo que obtuvo la alianza Cambiemos dentro del empresariado local y en el exterior. Si

⁷ En países dependientes como la Argentina el incremento de la inversión suele generar una mayor demanda de importaciones dado que la mayor parte de los medios de producción provienen del extranjero (Marini, 1973). Por otro lado, en tanto una parte importante de la inversión corresponde a empresas transnacionales, si bien ello genera un efecto positivo inicial sobre el balance de pagos, la remisión de utilidades posterior implica un egreso de divisas la mayor parte de las veces superior al ingreso de las mismas bajo la modalidad de inversión extranjera directa (Braun, 1973).

bien la elección de funcionarios con un perfil empresarial (incluyendo al propio Macri) pudo haber generado una mayor simpatía *a priori* dentro de este universo, el respaldo se basa fundamentalmente sobre el hecho de que el gobierno se propuso concretar demandas del conjunto del capital, como la mayor libertad a los movimientos de capitales, la necesidad de incrementar la disponibilidad de divisas -a través de endeudamiento- y la caída del costo salarial con el consecuente aumento de la tasa de explotación.

Ciertamente la mayor parte de las medidas tomadas por el gobierno de Macri tienen poco de “desarrollistas” y mucho de “neoliberales”, en tanto su objetivo es retomar la ofensiva del capital sobre el trabajo sin cuestionar -sino más bien lo contrario- la orientación que “el mercado” le imprime a las fuerzas productivas locales a partir de las ventajas comparativas absolutas del país. El hecho de que se busque reforzar una inserción internacional reprimarizada a través de nuevos acuerdos internacionales es ilustrativo de ello.

Sin embargo, como se verá a continuación, la direccionalidad de las medidas adoptadas no se agota en esta cuestión. Las mismas no sólo apuntaron a reducir el papel del Estado en la regulación de la actividad económica, bajar los costos laborales e incrementar las ganancias en términos generales, sino que también tuvieron como objetivo generar un cambio en los precios relativos (“sinceramiento”) de manera que tuviese lugar una readecuación de la posición relativa de las distintas fracciones capitalistas.

Los cambios en los precios relativos: un nuevo esquema de ganadores y perdedores

Como se señaló, las mencionadas medidas económicas tomadas por el gobierno de Macri no sólo apuntaron a generar una redistribución regresiva del ingreso en el marco de una ofensiva del capital sobre el trabajo sino que también tuvieron como objetivo generar una redistribución del excedente entre las distintas fracciones del capital.

Tras la salida de la convertibilidad hubo un fuerte cambio en los precios relativos en favor de los sectores productores de bienes y la construcción en detrimento

de los servicios (especialmente los públicos), acompañados, a partir de 2003, de una muy fuerte caída de la tasa de interés real, que incluso en algunos años llegó a ser negativa (Cantamutto y Wainer, 2013). Si bien esta estructura de precios relativos se fue alterando parcialmente a partir de la imposición de retenciones a las exportaciones⁸, la creciente apreciación cambiaria⁹ y cierta recomposición -tardía- de tarifas en algunos sectores¹⁰, el mantenimiento de los subsidios a los principales servicios públicos y algunas medidas promocionales y proteccionistas^{11 12} mantu-

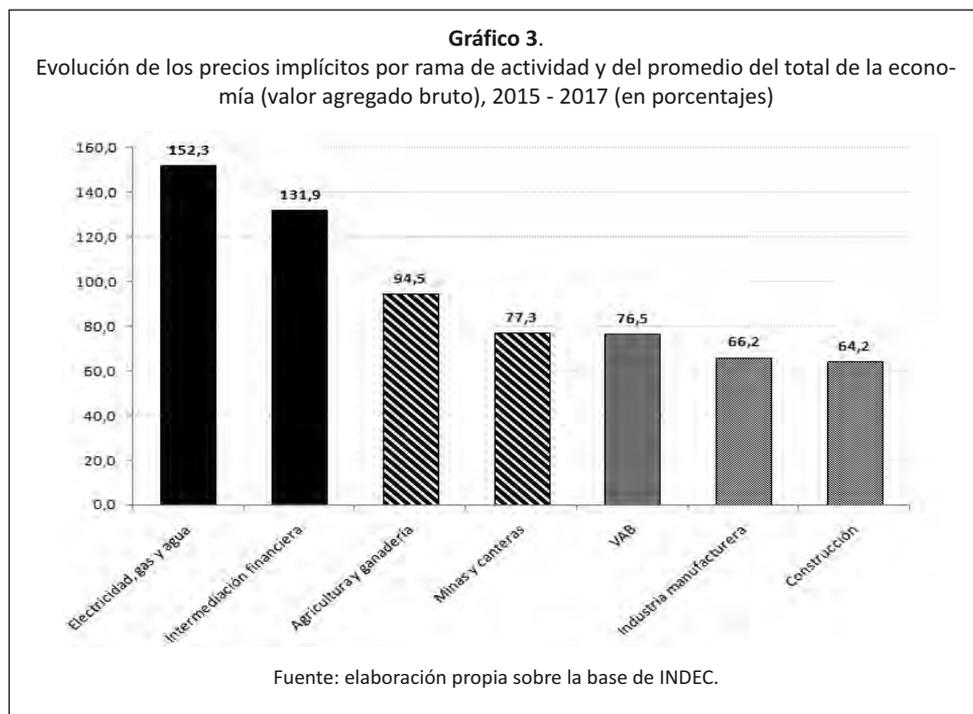
⁸ Las retenciones a las exportaciones se reinstalaron a comienzos del año 2002 bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando se impusieron alcúotas del 10% a la exportación de productos primarios y del 5% a las manufacturas. Luego las de productos primarios tuvieron sucesivas alzas hasta que en el año 2007 las retenciones a la soja alcanzaron el 35%, mientras que las del trigo el 28% y el maíz el 25%. Un año después se redujo los montos retenidos a estos últimos dos productos en cinco puntos porcentuales.

⁹ Tras la megadevaluación en 2002, en el año 2003 se inició un proceso de apreciación del tipo de cambio real producto de un aumento de la inflación más acelerado que la depreciación de la moneda. Si bien registraron algunas oscilaciones en determinadas coyunturas -crisis de 2009, comienzos de 2014-, hacia el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner (noviembre de 2015) el tipo de cambio multilateral, deflactado por el IPC-9 provincias, superaba en apenas un 6% al existente en diciembre de 2001, en tanto el tipo de cambio real bilateral con el dólar estadounidense era un 8% inferior al vigente al final de la convertibilidad.

¹⁰ De los servicios públicos, el que mayor aumento registró durante los gobiernos kirchneristas fue la distribución de gas, que en 2014 tuvo variaciones que alcanzaron, tras su tercera ronda de incrementos, un 676% para los hogares de mayor consumo y un 207% para los de menor consumo (Resolución 226/2014). También sufrieron aumentos más o menos regulares otro tipo de servicios como la telefonía móvil, la televisión por cable y la provisión de acceso a Internet por banda ancha.

¹¹ Tras quedar virtualmente paralizado durante los años noventa, el decreto 490 de 2003 volvió a autorizar la radicación de nuevas empresas bajo el régimen de promoción industrial en la provincia de Tierra del Fuego (algo que volvería a suceder en 2010 y 2011) e incorporó artículos puntuales. Adicionalmente, en el año 2009 la Ley 26.539 incrementó los gravámenes para una serie de productos importados de electrónica de consumo (excepto notebooks y netbooks) a la vez que el decreto 252/09 redujo la alícuota de impuestos internos para estos mismos bienes producidos en Tierra del Fuego. La combinación de estas últimas medidas generó fuertes beneficios para las empresas radicadas en la isla. Al respecto ver Rabinovich (2018); Schorr & Porcelli (2014).

¹² Ante las crecientes dificultades experimentadas en el sector externo y, especialmente, la fuerte reducción del superávit comercial a partir de 2013, la Secretaría de Comercio dispuso una serie de medidas cuyo objetivo fue restringir la salida de divisas por importaciones o, al menos, compensar su egreso con exportaciones. Entre las más relevantes se pueden mencionar las Notas de pedido y Planes de exportación 1 a 1, la ampliación de la cantidad de licencias no automáticas de importación y su posterior reemplazo por Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), además de establecer la obligatoriedad para las empresas mineras y petroleras de liquidar las divisas en el país.



vieron un esquema que posibilitaba la subsistencia -e inclusive la expansión- de ciertas actividades productivas “no competitivas” (textiles, calzados, electrónica de consumo) y la provisión de servicios básicos a bajo costo (electricidad, gas y agua) tanto para los consumidores finales como para las industrias y comercios.

Como se señaló, el objetivo de la alianza Cambiemos tras su llegada al poder en diciembre de 2015 no sólo fue generar una redistribución regresiva del ingreso en detrimento de la clase trabajadora, sino también modificar las rentabilidades relativas dentro de las clases propietarias. Puede realizarse una primera aproximación a estos cambios transcurridos en los dos primeros años del gobierno de Macri a partir de analizar cómo evolucionaron los precios implícitos de los principales sectores económicos (**gráfico 3**).

Como se puede observar en el gráfico 3, los servicios públicos regulados (electricidad, gas y agua), la intermediación financiera, la actividad agropecuaria y la

explotación minera y petrolífera mejoraron sus precios por encima del promedio de la economía (VAB), mientras que la industria manufacturera y la construcción lo hicieron por debajo de la misma. Pero incluso dentro de las actividades “ganadoras” pueden encontrarse marcadas diferencias, siendo que los servicios públicos y los financieros registraron un aumento muy superior en sus precios que las actividades productivas en general, incluyendo las actividades extractivas y el agro.

Desde ya que la evolución de los precios relativos de las actividades transables no puede ser atribuida enteramente a la política económica local, dado que también incide la cotización internacional de los bienes, especialmente cuando se trata de productos indiferenciados (*commodities*). Pero debe tenerse en cuenta también que la traslación de los precios internacionales al mercado doméstico no siempre es lineal, sino que depende, además de los costos relativos del transporte, del grado y sesgo de la intervención estatal en la administración del comercio exterior. En el caso del gobierno de Cambiemos, todas las medidas tomadas han ido en la dirección de liberalizar el intercambio de bienes, tornando a la producción local más sensible a los cambios en los precios internacionales.

Al comparar la evolución de los precios entre 2015 y 2017 por rubro, se observa que los más beneficiados fueron la fabricación y distribución de gas (278,5%) y la captación y distribución de agua (170,1%), seguidos por los cultivos agrícolas (157,0%), la generación y distribución de energía eléctrica (140,0%) y la intermediación financiera (131,9%). Se trata, en todos los casos, de actividades prestadoras de servicios o vinculadas con las producciones primarias (agro).

Entre las actividades más desfavorecidas por la evolución de los precios relativos se encuentran la construcción, que aumentó sus precios un 64,2%, más de doce puntos porcentuales por debajo del promedio de la economía (76,5%), y la mayoría de las actividades manufactureras, entre las que se destacan la producción de maquinaria de oficina e informática (46,4%), fabricación de equipos de radio y televisión (49,8%), maquinaria y aparatos eléctricos (51,8%), productos de metal (53,0%), cueros, marroquinería y calzados (54,6%), maquinaria y equipo (58,0%), caucho y plástico (58,3%) y textiles (59,0%). Por su parte, alimentos y bebidas, principal rubro manufacturero -aunque muy vinculado con la producción prima-

ria-, incrementó sus precios un poco por debajo del promedio de la economía (72,7%).

En este sentido, se puede decir que tanto la devaluación de la moneda como la quita de retenciones beneficiaron al capital agrario y las actividades extractivas (minería e hidrocarburos), el incremento de las tarifas de servicios públicos benefició a los capitales invertidos en ese sector y el aumento de la tasa de interés, la eliminación de regulaciones al ingreso y salida de capitales y el pago a los fondos buitres -con la consecuente “reapertura” de los mercados internacionales de crédito- beneficiaron al capital financiero. Por el contrario, la apertura comercial y la caída del consumo interno terminaron perjudicando, en términos de precios relativos, a la mayor parte de las actividades manufactureras, en especial aquellas mayormente orientadas al mercado interno y fuertemente expuestas a la competencia externa.

Estos cambios en la estructura de precios relativos a partir de la asunción del gobierno de Cambiemos tuvieron un impacto en la rentabilidad de las distintas actividades y en el gasto público. Esto último, fundamentalmente a partir del incremento de los precios de las tarifas de los servicios públicos que no sólo impulsó una recuperación de la rentabilidad en las firmas de este sector sino que también permitió una reducción de las transferencias que realiza el Estado a través de los subsidios. Sin embargo, como se verá a continuación, la mejora en la ecuación económica en los sectores de actividad beneficiados con los cambios en los precios relativos no necesariamente tuvo un correlato directo en términos de crecimiento económico, o al menos no en la medida esperada.

Las respuestas del capital a las “señales del mercado”: un análisis del comportamiento sectorial

No cabe duda de que las medidas económicas tomadas tras el cambio de gobierno tuvieron un impacto significativo en la estructura de precios relativos. Resta ver si las nuevas “señales de precios” fueron suficientes para impulsar la actividad en los sectores beneficiados y si estos lograron traccionar al conjunto de la economía. Para ello, en el **cuadro 1** se presenta la evolución del Valor Agregado Bruto entre 2004 y 2017 para un conjunto de sectores seleccionados. El período elegido

Cuadro 1.
 Valor Agregado Bruto a precios básicos por grandes ramas de actividad económica, 2004-2017
 (en millones de pesos a precios de 2004)

	Agricultura y ganadería	Explotación de minas y canteras	Industria manufacturera	Electricidad, gas y agua	Construcción	Intermediación financiera
2004	37434	24322	91866	8702	14905	15079
2005	45308	24246	98686	9235	16763	16563
2006	43884	25556	107666	9775	18838	18743
2007	48136	24931	115777	10025	20865	21355
2008	46919	24648	119970	10511	21741	22685
2009	34069	24710	111260	10456	19066	22649
2010	48875	25099	123396	10638	20930	22762
2011	47515	23636	132857	11142	22928	25000
2012	40843	23350	128986	11662	22369	26836
2013	45469	22405	130926	11718	22346	27596
2014	46983	22755	124309	11949	21895	26839
2015	50709	23130	125261	12477	22554	27180
2016	48089	21862	118748	12640	20029	26320
2017	50081	21120	122042	12499	22113	27666
TAA 2015-2017	-0,6	-4,4	-1,3	0,1	-1	0,9
TAA 2004-2015	2,8	-0,5	2,9	3,3	3,8	5,5
TAA 2004-2011	3,5	-0,4	5,4	3,6	6,3	7,5
TAA 2011-2015	1,6	-0,5	-1,5	2,9	-0,4	2,1

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC.

tiene por finalidad poder proporcionar una visión de más largo plazo en la trayectoria de los sectores de modo de poder identificar continuidades y rupturas en los comportamientos respectivos a partir del cambio de gobierno.

Tal como se puede apreciar en el **cuadro 1**, de los sectores más beneficiados por los cambios en los precios relativos tras la asunción del gobierno de Cambiemos, sólo registraron tasas positivas de crecimiento acumulado entre 2015 y 2017 los servicios públicos (electricidad, gas y agua) y la intermediación financiera, mientras que el agro y las actividades extractivas mostraron en este último año valores reales inferiores a los vigentes durante el último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. De todos modos, como se puede constatar al comparar las distintas tasas, aun habiendo registrado valores positivos, tanto los servicios públicos como la intermediación financiera tuvieron un crecimiento anual acumulativo inferior entre 2015 y 2017 que entre 2004 y 2015. Si bien es cierto que en 2004 el valor agregado de ambos sectores, y especialmente el financiero, se encontraban en niveles bajos debido a la forma en que se resolvió la crisis de la convertibilidad (Cantamutto & Wainer, 2013), esta diferencia se mantiene incluso si la comparación se hace sólo con el período del último mandato de Fernández de Kirchner (2011-2015).

Los servicios públicos registraron un crecimiento en 2016 (1,3%) y una caída en 2017 (-1,1%), que de todos modos le permitió situarse por encima del nivel de 2015. Si bien la recomposición tarifaria mejoró la rentabilidad obtenida y esperada de las firmas prestatarias¹³, debe recordarse que uno de los principales objetivos de ésta fue la reducción de los subsidios estatales, es decir, no se tradujo en su totalidad en mayores beneficios empresariales. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el consumo de electricidad, gas y agua en 2016 y 2017 no registró un crecimiento significativo, especialmente en este último año (0,2%).

¹³ La recomposición de la rentabilidad de las firmas prestatarias de servicios públicos ha sido gradual pero sostenida. Si bien no se cuenta con los balances actualizados de las firmas, una aproximación al incremento de la rentabilidad obtenida y esperada se refleja en el precio de las acciones. Al respecto, los precios de las acciones de las transportadoras y distribuidoras de energía que cotizan en bolsa subieron de manera muy pronunciada entre diciembre de 2015 y enero de 2018. Por caso, mientras que la inflación minorista acumulada en dicho período fue del 77% (CIFRA), las acciones de Edenor aumentaron un 1.127%, las de Transportadora Gas del Norte (TGN) un 1.040%, Transportadora Gas del Sur (TGS) un 511% y Metrogas un 737% (cálculos elaborados sobre la base de la información de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires).

El segundo sector más beneficiado por la evolución de los precios relativos, la intermediación financiera, también logró incrementar su valor agregado entre 2015 y 2017. Esta actividad tuvo un crecimiento significativo en este último año (5,1%) que le permitió superar lo perdido en 2016 (-3,2%). Una explicación de este dispar comportamiento en un contexto de fuerte mejora de los precios sectoriales (tasa de interés, comisiones bancarias, otros servicios) se debe a que el fuerte salto inflacionario de 2016 (40,5% anual) y la caída en el nivel de actividad general (-1,8%) impactaron negativamente en el otorgamiento de créditos, siendo que el monto prestado por el conjunto de entidades financieras se contrajo un 6,3% respecto al año anterior. Por el contrario, en 2017 los préstamos se expandieron un 5,1%, principalmente a partir de la implementación de créditos hipotecarios ajustados por la inflación (UVA)¹⁴.

Por su parte, la explotación de minas y canteras se contrajo de manera significativa tanto en 2016 como en 2017, siendo la actividad con peor desempeño en el período (-4,4% anual), superando incluso a los sectores perjudicados por la evolución de los precios relativos, como la construcción (-1,0%) y la industria manufacturera (-1,3%). De todos modos cabe señalar que este sector había registrado tasas acumulativas de crecimiento levemente negativas también durante el período kirchnerista (2004-2015). Este comportamiento se debió fundamentalmente a la extracción de petróleo y gas, la cual alcanzó su valor máximo en 2007 para luego descender prácticamente de manera ininterrumpida hasta 2017¹⁵, mientras que la minería exhibió fluctuaciones menores, siendo que el registro alcanzado en el último año fue el cuarto más alto de toda la serie¹⁶.

En el caso de la actividad agropecuaria, se observa una contracción de la producción en 2016 (-5,2%) y una expansión en 2017 (4,1%) que no logra compensar

¹⁴ Datos de elaboración propia a partir de estadísticas monetarias y financieras del BCRA. Para deflactar los valores nominales se utilizó el IPC-9 provincias (CIFRA).

¹⁵ El único año entre 2008 y 2017 en el que la extracción de petróleo, gas y carbón exhibió un leve crecimiento frente al año anterior fue en 2015 (0,75%) (INDEC).

¹⁶ El valor agregado bruto a precios de 2004 registrado por la actividad minera en 2017 fue superado en los años 2010, 2012 y 2015 (INDEC).

la caída del año anterior. Mientras que en este último año se expandieron todas las actividades vinculadas con la producción agropecuaria, en 2016 sólo lo hicieron los servicios agrícolas y pecuarios (1%), contrayéndose tanto los cultivos agrícolas (-5,2%) como la cría de animales (-7,4%). Al respecto, cabe señalar algunas cuestiones que incidieron en dicho comportamiento. En primer lugar, debe considerarse que la producción agrícola responde a un ciclo temporal que no coincide con el año calendario, ya que la mayor parte de lo que se siembra un año, se cosecha en otro (la siembra se inició antes del cambio de gobierno y, por ende, previo a la devaluación y reducción de retenciones). Por otro lado, además de las medidas de carácter interno, debe considerarse la cotización internacional de los precios, siendo que el precio internacional de la soja, principal cultivo del país, sufrió un descenso del 18% entre mediados de 2015 y marzo de 2016. En dicho marco, aunque la producción total de cereales y oleaginosas creció durante el primer año del gobierno de Cambiemos (pasó de 121,9 a 124,3 millones de toneladas), el valor agregado de los cultivos agrícolas cayó un -5,2%¹⁷. La nueva estructura de precios relativos - que favoreció al sector agropecuario- tuvo un mayor impacto en 2017, año en el cual se alcanzó una cosecha récord (135,8 millones de toneladas), impulsada fundamentalmente por el trigo y el maíz¹⁸. La evolución de los precios internacionales impidió que la cosecha récord del último año superase en valor a la de 2015, aunque de todos modos se trató del segundo mejor registro histórico.

En lo que respecta a la actividad ganadera, debe tenerse en cuenta que, al ser tanto un bien de consumo como un medio de producción, en el corto plazo una me-

¹⁷ Según información de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agroindustria, la producción cerealera fue la única que se expandió en 2016, traccionada por un incremento en la producción de maíz (17,7%).

¹⁸ En 2017 la producción de trigo se incrementó un 62,6% respecto del año anterior, en tanto el maíz lo hizo un 24,3% y la soja cayó un -6,5% (Subsecretaría de Agricultura, Ministerio de Agroindustria). El mejor comportamiento de cultivos como el trigo y el maíz frente a la soja -principal cultivo del país- se debió fundamentalmente a la mejora en los precios relativos de los primeros a partir de eliminación de las retenciones a las exportaciones, mientras que en el caso de la soja se redujeron "sólo" cinco puntos (de 35 a 30% en el caso de los granos). Al asumir, el gobierno de Macri había propuesto un esquema de reducción gradual de las retenciones a la soja de cinco puntos por año, pero por cuestiones fiscales se decidió postergar su aplicación para 2018, por lo cual en dicho año las retenciones máximas a dicho cultivo en 2017 se mantuvieron en el 30%.

jora en los precios suele tener el efecto contrario en la faena, dado que propicia la retención de vientres con vistas a aumentar la producción futura. De todos modos, debe señalarse que, si bien la producción ganadera cayó en su conjunto, se produjo un aumento de la faena de exportación, lo cual es consistente con la mejora en los precios a partir de la devaluación y quita de retenciones en simultáneo con una caída del consumo interno.

El mayor contraste en la evolución del valor agregado entre el período kirchnerista y el actual se da en la construcción y la industria manufacturera. Estas actividades, que fueron las más perjudicadas por la evolución de los precios tras el cambio de gobierno, habían registrado tasas anuales de crecimiento positivas entre 2004 y 2015 (3,8% y 2,9% respectivamente). Sin embargo, si se analiza un poco más detalladamente la trayectoria que siguieron estos sectores a lo largo de los ciclos kirchneristas, se puede observar que el crecimiento acumulado tanto de la industria como de la construcción tuvo lugar sólo hasta 2011; a partir de allí y hasta 2015 la tasa anual muestra valores negativos (-1,5% y -0,4%, respectivamente). En este sentido, el cambio de gobierno, más que expresar una modificación rotunda en la trayectoria de ambos sectores implica una profundización de las tendencias mostradas en los años previos.

En el caso de la construcción, la actividad registró un fuerte crecimiento en 2017 (10,4%), aunque no alcanzó para revertir la pérdida exhibida en 2016 (-11,2%). La recuperación de dicha actividad estuvo vinculada mayormente con la reactivación de la obra pública –virtualmente paralizada en 2016– y, en menor medida, a la fuerte expansión de los créditos hipotecarios atados a la inflación. Este repunte de la actividad quedó reflejado en el incremento de la inversión sectorial, que registró un crecimiento del 12,4% en 2017.

No debería llamar la atención el desempeño de la industria manufacturera en 2016 (-5,2%), perjudicada tanto por la evolución de los precios relativos como por la caída del consumo y la inversión. Si bien volvió a crecer en 2017 (2,8%), no logró recuperar la caída registrada el año anterior. En este sentido, la recuperación del consumo privado (3,6%) y la inversión (11,3%) en 2017 no alcanzaron para impulsar un proceso de crecimiento mayor en la actividad manufacturera. Se supone

que, en su carácter mayormente mercado internista y de productora de medios de producción (bienes intermedios y de capital), dicha actividad debería haberse visto beneficiada por el incremento de ambas variables. Respecto del primer factor, debe señalarse que buena parte del mayor consumo estuvo dirigido hacia bienes importados. En efecto, la importación de bienes de consumo final se incrementó un 20,9% en dólares en 2017, en tanto la compra de vehículos automotores del exterior -uno de los principales rubros manufactureros- lo hizo en un 40,9%. En ello influyó tanto la apertura comercial promovida por el gobierno de Cambiemos como el patrón redistributivo seguido, dado que los sectores de más altos ingresos tienen una canasta de consumo con un componente importado más alto que el promedio de los hogares.

Pero tampoco el importante aumento que registró la inversión sirvió para impulsar el crecimiento del sector industrial. Ello se debe a que la misma, en lo que respecta a la adquisición de medios de producción, estuvo mayormente orientada hacia las compras en el exterior. En efecto, el crecimiento de la compra de maquinaria y equipo importada en 2017 (19,8%) superó largamente a la de maquinaria nacional (4,9%), en tanto el contraste es aún mayor en la adquisición de equipo de transporte con finalidad productiva, siendo que los vehículos importados registraron una variación positiva (11,3%) frente a una contracción de su contraparte nacional (-4,5%).

En síntesis, mientras que en los dos primeros años del gobierno de Cambiemos hubo una alteración importante de los precios relativos que benefició principalmente a los sectores de servicios y, en menor medida, a las actividades agropecuaria y extractivas, ello no se tradujo en todos los casos en un incremento significativo de la producción. Las “señales de precios” no parecen haber sido suficientes para incrementar de manera sustantiva la inversión en todos los sectores beneficiados y menos aún para traccionar al conjunto de la economía. Sin duda el comportamiento de los distintos sectores económicos no puede ser atribuido exclusivamente al cambio en los precios relativos, ya que intervienen otros factores como la evolución de la demanda y de los precios internacionales. En este sentido, la mejora en los precios puede implicar, sobre todo en un contexto de apertura económica y de caída o estancamiento salarial, una mejora en la rentabilidad de las firmas de los

sectores beneficiados, especialmente las más grandes, pero ello no se traduce automáticamente en un crecimiento sectorial significativo.

Los destinos del excedente y la restricción externa como condicionante

Hemos visto que la política económica llevada adelante durante sus primeros dos años por el gobierno de Cambiemos ha producido una redistribución regresiva del ingreso entre el trabajo y el capital, pero también una redistribución del excedente entre las distintas fracciones capitalistas. En dicho marco, en 2017 la economía argentina recuperó lo perdido en 2016, con un crecimiento de 2,9% frente a una caída del 1,8% en el año anterior. Sin embargo, este crecimiento resulta relativamente magro teniendo en cuenta el comportamiento de la inversión (11,3%). Su bajo peso en el PIB (gráfico 2) y la direccionalidad que adoptó la formación de capital no permiten afirmar que se esté frente al inicio de un proceso de desarrollo productivo sostenido, tal como se lo proponía -al menos declarativamente- el presidente Macri, que, cabe recordar, se presentaba como “desarrollista”¹⁹.

El gobierno de Macri, a tono con el pensamiento ortodoxo más tradicional, comenzó planteando que había que terminar con el “despilfarro populista”²⁰, frente a lo cual había que fomentar el ahorro, base necesaria para el despegue de la inversión y, por ende, de un crecimiento sustentable en el largo plazo. Sin embargo, el elevado nivel de atesoramiento registrado en nuestro país en las últimas décadas no parece avalar la idea de la insuficiencia de ahorro. El problema es que buena parte se realiza en divisas y por fuera del sistema financiero local, con lo cual no aumenta la masa prestable ni se reintegra al circuito productivo.

¹⁹ La inexistencia de un proceso sostenido de crecimiento y desarrollo se vuelve más evidente de considerar las proyecciones macroeconómicas que elaboró el propio gobierno en el proyecto de presupuesto 2019. Allí se estima una contracción del PIB de -2,4% para todo 2018 y de -0,5% para el año siguiente (Ministerio de Hacienda de la Nación).

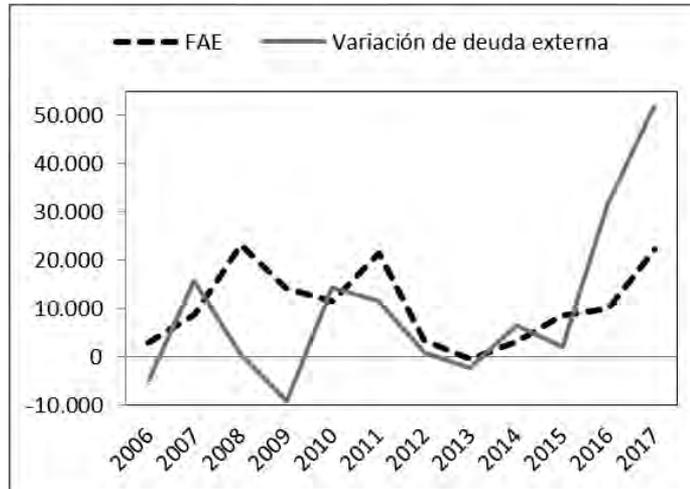
²⁰ En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional en 2016, Mauricio Macri sostuvo que “Encontramos un Estado plagado de clientelismo, de despilfarro y corrupción” (Palabras del presidente Mauricio Macri en la 134° apertura de sesiones ordinarias del Congreso, disponible en <https://www.caserosada.gov.ar/informacion/discursos/35651-palabras-del-presidente-mauricio-macri-en-la-134-apertura-de-sesiones-ordinarias-del-congreso>).

La fuga de capitales ha sido una constante en distintas etapas económicas desde las reformas aplicadas por la última dictadura militar (1976-1983) en adelante, aunque ha variado en intensidad según distintas coyunturas (Basualdo, 2017; Basualdo & Kulfas, 2002; A. Gaggero, J. Gaggero, & Rúa, 2015; A. Gaggero, Rúa, & J. Gaggero, 2013). La misma se había reducido notablemente a partir de la introducción de los controles cambiarios a fines de 2011, aunque ello generó otro tipo de problemas que no serán analizados aquí²¹. La eliminación de los controles cambiarios y de las restricciones cuantitativas a la compra de divisas tras la asunción de Macri favoreció la reactivación de la fuga por los canales tradicionales (**gráfico 4**). Dicha fuga fue financiada por un nuevo ciclo de endeudamiento externo que fomentó una apreciación del peso, garantizando una importante rentabilidad financiera en moneda “dura”.

En síntesis, no parece tratarse de un problema de insuficiencia de ahorro, menos aun cuando el mismo se incrementó a partir de la redistribución regresiva del ingreso impuesta por el gobierno de Cambiemos. No se procura en este trabajo abordar detalladamente la trayectoria de la inversión, pero al menos interesa destacar algunos motivos por los cuales un incremento en la magnitud del ahorro (vía redistribución regresiva del ingreso) no estaría teniendo como consecuencia un proceso inversor que asegure un desarrollo sustentable. El problema es cuánto y cómo se invierte el excedente. En este sentido, además de la escasa magnitud de la formación de capital respecto al tamaño de la economía, debe tenerse en cuenta el tipo de inversiones que se realizan. Es decir, se trata tanto de un problema cuantitativo como cualitativo.

²¹ Si bien la imposición de restricciones a la adquisición de moneda extranjera a partir del último trimestre de 2011 permitió contener la fuga de capitales e, indirectamente, la remisión de utilidades, dichas medidas también desincentivaron el ingreso de divisas frente a la aparición de un mercado cambiario paralelo (“blue”) con una cotización sustancialmente mayor al oficial, a la par que incentivaron la transferencia de ganancias al exterior por diversas vías como la utilización de precios de transferencia, el pago de intereses a empresas vinculadas y/o los pagos en concepto de royalties y honorarios. De esta manera, se fueron restringiendo las liquidaciones de divisas en el circuito oficial, lo cual fue incrementando las expectativas de devaluación. Al respecto consultar Belloni & Wainer (2016); Schorr & Wainer (2014).

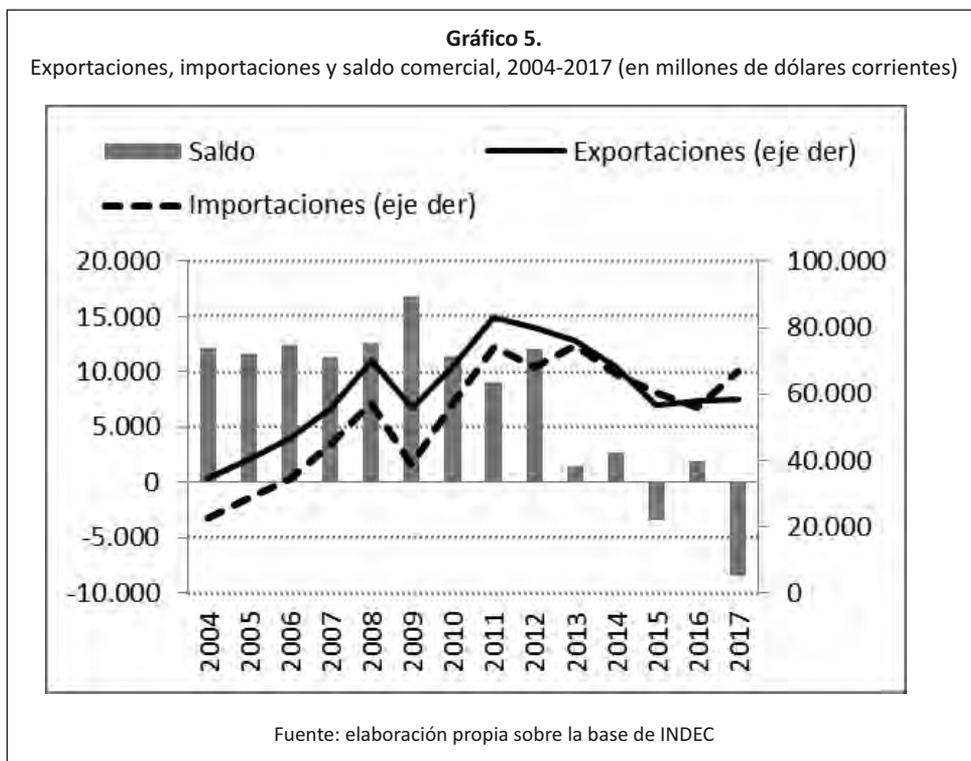
Gráfico 4.
Evolución de la formación de activos externos (FAE) y la variación de la deuda externa, 2003-2017 (millones de dólares)



Fuente: elaboración propia sobre la base de la información del BCRA.

En este sentido, como se señaló, buena parte de las inversiones “reales” tuvo como destino la compra de maquinaria y bienes importados, lo cual, si bien puede impulsar cierta modernización del aparato productivo, trae aparejados dos grandes problemas: por un lado, no favorece el desarrollo de nuevos sectores, sobre todo aquellos ligados a la producción de bienes de capital e insumos intermedios; por otro lado, tiende a incrementar el desbalance comercial (**gráfico 5**). Es decir, buena parte del excedente que se reinvierte tiene poca o nula incidencia en el desarrollo de proveedores locales y, por lo tanto, tiende a debilitar la situación del sector externo.

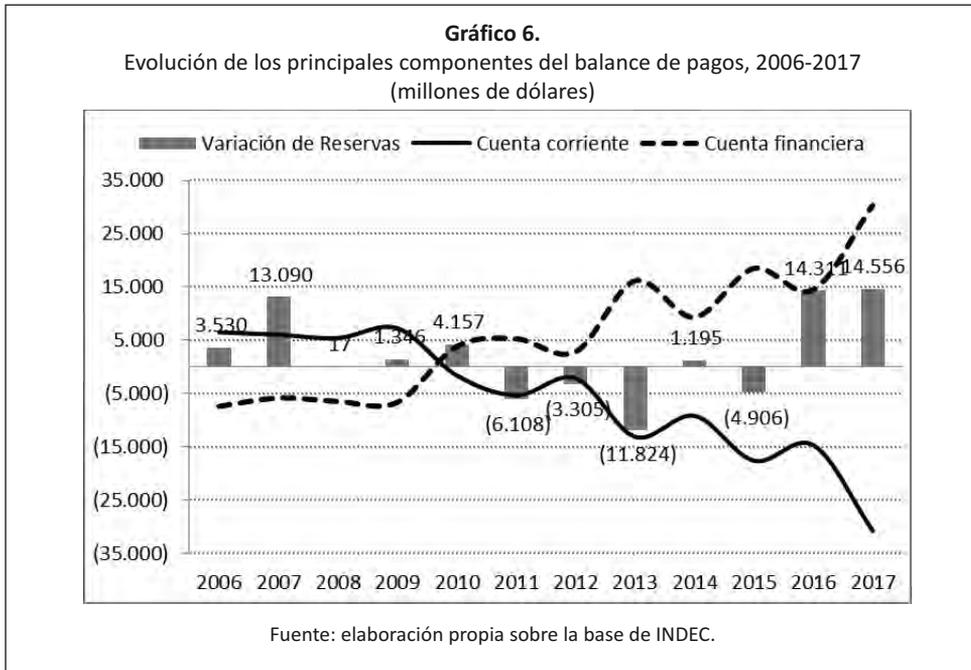
Además, una redistribución regresiva del ingreso tiende a fomentar no sólo el ahorro (que, como vimos, en buena medida se destina a la fuga de capitales), sino también el consumo suntuario de los sectores de mayores ingresos, el cual tiene un alto componente importado. A ello se le suma otro tipo de gastos de estos sec-



tores como el turismo en el exterior, lo cual agrava el déficit en cuenta corriente y, con ello, la situación del balance de pagos²² (gráfico 6).

Con la confluencia de una serie de factores coyunturales y estructurales, durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner comenzaron a hacerse cada vez más evidentes los problemas en el sector externo (Cantamutto, Schorr, & Wainer, 2016; Schorr & Wainer, 2014). Así, se pasó de una situación de holgura a otra de restricción externa, lo que derivó en la aplicación de los mencionados controles cambiarios y una mayor administración del comercio exterior. Ello generó una dis-

²² Según los datos del balance de pagos (INDEC), la salida de divisas por viajes al exterior fue de US\$ 9.026 millones en 2016 y de US\$ 10.506 millones en 2017, dando como resultado saldos negativos de US\$ -4.340 millones y US\$ -5.446 millones, respectivamente.



minución en el nivel de actividad, situación que no fue más grave por la utilización de una parte importante de las reservas internacionales acumuladas en el período anterior (**gráfico 6**). Pero, de todos modos, ello derivó en una nueva “hoja de ruta” en el manejo del sector externo, con la consecuente redefinición del rol de los distintos actores proveedores de divisas.

El kirchnerismo afrontó la “restricción externa” de un modo contradictorio y, vale resaltarlo, convivieron el intento de regular el comportamiento del capital extranjero con la búsqueda por reinsertar a la Argentina en el mercado internacional de crédito, para lo cual se realizaron varias concesiones²³. Así, el gobierno dio cre-

²³ Esto se percibió en múltiples gestos y políticas concretas, como la reapertura del canje de deuda en 2010 en las mismas condiciones de cinco años antes. No obstante, a partir de 2012 se sucedieron reveses judiciales en cortes extranjeras (principalmente la de Nueva York) debido a demandas de los llamados

ciente énfasis a la tarea de rehabilitar la ruta de la deuda y la inversión extranjera.

Desde el punto de vista de los actores con poder estructural, la operación del gobierno dio más relevancia al capital extranjero en general, y al financiero en particular, que fue el sector de mayores ganancias y expansión a nivel local a partir de 2008. Esto implicó el inicio de un reordenamiento en el interior del bloque en el poder, proceso que terminaría de plasmarse bajo la presidencia de Mauricio Macri. Esta nueva “hoja de ruta” trazada en el transcurso del *segundo kirchnerismo* es lo que el gobierno que asumió en diciembre de 2015 parece haber convertido en programa económico, despojándolo de las políticas que la limitaban e imprimiéndole un sesgo profundamente regresivo, aunque con importantes límites sociales.

En efecto, el macrismo logró sortear transitoriamente la restricción externa gracias a un aceleradísimo proceso de endeudamiento externo (gráfico 4), lo cual le permitió aumentar el nivel de las reservas internacionales (gráfico 6) a costa de otorgarle al capital financiero un papel decisivo. Si bien, como se vio, este proceso se venía dando desde antes del cambio de gobierno, el conflicto abierto con los fondos buitres y el posicionamiento político de Fernández de Kirchner ante ello impidió que termine de consolidarse.

Sin embargo, lejos de “resolver” de manera sustentable los problemas en el sector externo, el endeudamiento externo los desplaza temporalmente, agravando la situación en el mediano plazo en la medida en que los servicios de la deuda van incrementándose. Ello refuerza la dependencia financiera dado que se vuelve necesario refinanciar una parte creciente de los vencimientos. En ese marco, cualquier elemento de la coyuntura internacional que modifique negativamente las condiciones de financiamiento externo de la economía local (por ejemplo, aumentos en las tasas de interés en Estados Unidos) o una evaluación crecientemente desfavorable

“fondos buitres”. El kirchnerismo, en especial desde 2014, tomó el camino de reanimar las relaciones con los mercados financieros internacionales, expresados en diversos arreglos: el acuerdo con el Club de París, el pago a Repsol por la toma del control accionario de YPF, el reconocimiento de los fallos pendientes en el CIADI y la suscripción de una línea de swap con China. Al respecto ver Cantamutto et al. (2016).

rable de parte las principales calificadoras de riesgo sobre el nivel de endeudamiento del país pueden derivar en serios problemas para el gobierno²⁴.

Cualquier economista sabe que el endeudamiento externo tiene un límite -la discusión, en todo caso, es cuál es- y por eso la apuesta de largo plazo del gobierno parece ser la de profundizar la inserción internacional de la Argentina basada sobre sus ventajas comparativas naturales²⁵. De esta manera, se potencia también a los principales proveedores de divisas que forman parte de la economía real: el sector agropecuario, la agroindustria y la megaminería.

Pero esta apuesta tampoco carece de inconvenientes. La priorización de las ventajas comparativas en detrimento de las actividades ligadas al mercado interno va de la mano del ajuste social, dado que las actividades que están en condiciones de operar en condiciones de libre cambio cuentan con poca capacidad de tracción sobre el resto de la economía y, sobre todo, son poco demandantes de mano de obra. En este sentido, la subsistencia de actividades con niveles de productividad por debajo del internacional sin protección pasa a depender casi exclusivamente de la reducción del valor de la fuerza de trabajo.

Los problemas sociales de tal apuesta son evidentes, ya que perjudica fuertemente a la mayor parte de la clase trabajadora y a los sectores empresarios mercadointernistas ligados al consumo masivo. La resistencia social a profundizar este sendero y la necesidad de revalidarse electoralmente han llevado al gobierno a prolongar el endeudamiento externo de manera de poder avanzar más “gradualmente” en el proceso de ajuste. Sin embargo, tal como quedó en evidencia tras el acuerdo

²⁴ Ello quedó cada vez más en evidencia desde que se desató la corrida cambiaria en mayo de 2018 y que llevó al gobierno a firmar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 50 mil millones de dólares a otorgarse a lo largo de tres años. Sin embargo, el mismo no resultó suficiente para generar confianza sobre la capacidad de repago del país y, tras una nueva devaluación de la divisa a fines de agosto, el gobierno solicitó un nuevo acuerdo que a fines de septiembre todavía se estaba negociando.

²⁵ Mauricio Macri sostuvo en reiteradas ocasiones que su objetivo era convertir a la Argentina en el “supermercado del mundo”. Al respecto ver, por ejemplo, sus declaraciones realizadas en la feria Expoagro (marzo de 2016), sus comentarios en el Foro de Negocios e Inversiones Argentina-China realizado en Beijing (mayo de 2017), o su discurso de apertura de la 131ª exposición Rural (julio de 2017).

alcanzado con el FMI, la oposición “deuda vs. ajuste” es solo aparente, ya que el creciente peso de los intereses generados por el endeudamiento externo exige un creciente ajuste en el resto del gasto público y siembra incertidumbre sobre la evolución del sector externo.

Reflexiones finales

La redistribución regresiva del ingreso y el predominio de la lógica financiera por sobre la productiva son objetivos centrales del ideario neoliberal. En este sentido, si bien se trata de un proceso aún en desarrollo, deberían quedar pocas dudas sobre la caracterización ideológica del gobierno de Macri. Sin embargo, una de las hipótesis de este trabajo es que la orientación de las políticas aplicadas no se debió sólo a las preferencias político-ideológicas del personal del gobierno sino también a las limitaciones que presenta un modo de acumulación dependiente como el que predomina en la Argentina.

Durante la primera etapa de los gobiernos del kirchnerismo hubo un crecimiento muy significativo de la economía y, en especial, de las actividades productivas. Sin embargo, varios trabajos han señalado que se trató mayormente de un proceso de crecimiento sin cambio estructural (Belloni & Wainer, 2012; CEPAL, 2012; Fernández Bugna & Porta, 2007; Katz & Bernat, 2013; Schorr, 2013; Wainer, 2011). Las limitaciones de este tipo de crecimiento se hicieron evidentes con la reaparición de problemas en el sector externo.

La apuesta del gobierno de Cambiemos para superar la *restricción externa* no ha sido exactamente “desarrollista”, es decir, a través de una política de cambio estructural que potencie el desarrollo de nuevos sectores sustitutos y/o exportadores, sino más bien “neoliberal”, esto es, a través de endeudamiento externo y el máximo aprovechamiento de las ventajas comparativas estáticas. Ello ha quedado plasmado, como se mencionó, en la estrategia de inserción internacional del macrismo, subordinada a los requerimientos de los países centrales.

De este modo, la orientación neoliberal del personal que copó el Estado tras la victoria de Cambiemos fue coherente con la necesidad de “re-ajustar” la política a

la economía o, en otras palabras, limitar la tendencia redistributiva del Estado a las “posibilidades” que ofrece una estructura económica desequilibrada y dependiente como la argentina (siempre suponiendo la obtención de una tasa de ganancia considerada “normal” por el capital). Ello a través de dos caminos no necesariamente contrapuestos sino más bien complementarios: por un lado, favoreciendo a los sectores con ventajas comparativas estáticas -agro, minería, agroindustria- y, por otro, desvalorizando la fuerza de trabajo. Ambas cuestiones tienen importantes consecuencias sociales que, en una estructura social y con un nivel de organización como la argentina, suelen generar una fuerte resistencia en vastos sectores sociales.

Si bien ha habido otros proyectos de reestructuración neoliberal anteriormente en la Argentina, uno de ellos se hizo bajo un gobierno fuertemente autoritario (1976-1983), en tanto el otro (1989-2001) se impuso frente a un cuadro social y económico incomparablemente más degradado que el que se encontró la administración macrista. En este sentido, y más allá de la pasividad de buena parte de la dirigencia sindical, la clase trabajadora argentina ha dado muestras de que no está dispuesta a soportar grandes pérdidas sin ofrecer resistencia, al menos en tanto no medien mecanismos coercitivos más duros que garanticen un nuevo y fuerte disciplinamiento de la misma (como lo fueron la hiperinflación de 1989/90 y la hiperdesocupación entre 1995 y 2002). Si bien el gobierno de Macri ha avanzado tempranamente en la represión a la protesta social, esta vía tiene sus limitaciones en tanto procure mantener su carácter formalmente democrático y mientras no operen a pleno los mecanismos disciplinarios “de mercado”.

Es a partir de este cuadro que se puede comprender el relativo “gradualismo” aplicado por el gobierno de Cambiemos, el cual se sustentó sobre un nuevo y acelerado ciclo de endeudamiento externo. Dicha estrategia fue posible debido tanto al favorable contexto internacional -con la existencia inversores internacionales ávidos de altos rendimientos financieros ante la baja rentabilidad en los países centrales- como por el relativamente bajo ratio de endeudamiento que presentaba la economía argentina tras más de una década de “pagadora serial”²⁶.

²⁶ “Más que deudores recalcitrantes somos pagadores seriales”, así se refirió Cristina Fernández de Kirchner por cadena nacional en su respuesta al fallo favorable a los fondos buitres por parte de la Cámara de Ape-

El hecho de que el ajuste haya sido menos intenso gracias al parche del endeudamiento no quita que la gran perdedora con las medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos desde su asunción haya sido la clase trabajadora. La pérdida de ingresos y el deterioro de los principales indicadores laborales así lo corroboran. De todos modos no hay dudas de que la situación empeorará teniendo en cuenta que al gobierno se le acabó el “endeudamiento fácil” en los mercados y tuvo que acudir al rescate del FMI. Los vencimientos de la deuda pública tienen un peso creciente sobre el gasto público y son en su mayoría en moneda extranjera. A ello debe agregársele un importante lastre normativo para promover la “lluvia de inversiones” que erosiona la capacidad de decisión nacional y que es de difícil reversión en el corto plazo.

Más allá de que en esta ofensiva del capital sobre el trabajo haya confluído el conjunto de la clase capitalista, como se señaló, también pueden encontrarse “ganadores” y “perdedores” al interior de ésta. Entre los primeros se destacan las firmas prestatarias de servicios públicos, el capital financiero y, en menor medida, el capital agrario y aquel invertido en actividades primarias en general.

El resultado es menos auspicioso para la fracción que supo poseer cierta hegemonía durante la primera etapa de los ciclos kirchneristas: el capital industrial. De todos modos cabe señalar que hay distintas situaciones en su interior: mientras que algunas grandes firmas que pertenecen a la elite exportadora y/o que aprovecharon las nuevas posibilidades de “valorización financiera” pudieron haber transitado en mejores condiciones este proceso, la situación fue mucho peor para las firmas orientadas al mercado interno y, sobre todo, al consumo masivo, entre las que predominan las de menores dimensiones.

La supuesta apuesta “desarrollista” del macrismo no parece tal en tanto no apunta a resolver los problemas estructurales que presenta una economía dependiente como la argentina. En economías subdesarrolladas como la nuestra el mecanismo de precios, por más que garantice mayores ganancias al capital, no sirve como orientador de las inversiones necesarias para desarrollar nuevos sectores

laciones de Nueva York el 26 agosto de 2013. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=tDml-ZoEM1DE>.

modernos y competitivos. No se trata de una problemática novedosa ni mucho menos. Los pioneros del pensamiento estructuralista latinoamericano como Celso Furtado ya lo habían advertido más de medio siglo atrás: “para que la política de desarrollo no perjudique la estabilidad, es necesario que la misma asuma la forma de una orientación positiva del proceso de formación de capital. No se trata solamente de crear condiciones propicias para que los empresarios intensifiquen su esfuerzo de inversión: es necesario dar un paso adelante, garantizando que las inversiones provoquen las modificaciones estructurales requeridas por el desarrollo” (Furtado, 1964).

Bibliografía

- Amsden, A. (2001). *The Rise of “The Rest”: Challenges to the West from Late-industrializing Economies*. New York: Oxford University Press.
- Basualdo, E. (2017). *Endeudar y fugar. Un análisis de la historia económica argentina, de Martínez de Hoz a Macri*. (E. Basualdo, Ed.). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Basualdo, E., & Kulfas, M. (2002). La fuga de capitales en la Argentina. In J. Gambina (Ed.), *La globalización económico-financiera. Su impacto en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Belloni, P., & Wainer, A. (2012). *La Argentina en la posconvertibilidad: ¿Un nuevo modelo de desarrollo? Un análisis a partir de los cambios y las continuidades en el intercambio comercial* (Documentos de Trabajo 23). Buenos Aires.
- Belloni, P. & Wainer, A. (2016). Inserción externa y dependencia : contradicciones y límites del neodesarrollismo en la Argentina. In Félix, M., López, E. y García, M. (coords.) *Desarmando el modelo. Desarrollo, conflicto y cambio social tras una década de neodesarrollismo*. Buenos Aires: El Colectivo.
- Braun, O. (1973). Desarrollo del capital monopolista en la Argentina. In O. Braun (Ed.), *El Capitalismo Argentino en Crisis* (pp. 11–44). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Canelo, P., & Castellani, A. (2017a). *Perfil sociológico de los miembros del gabinete inicial del presidente Mauricio Macri* (Informe de investigación 1).
- Canelo, P., & Castellani, A. (2017b). *Puerta giratoria, conflictos de interés y captura de la decisión estatal en el gobierno de Macri. El caso del Ministerio de Energía y Minería de la Nación* (Informe de investigación 2).

- Cantamutto, F. J. (2016). *El tarifazo: breve estudio sobre el caso del gas* (Análisis, 15). Buenos Aires. Retrieved from <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentiniem/13018.pdf>
- Cantamutto, F. J., & Schorr, M. (2017, May). Rumbo claro, límites crecientes. *Le Monde Diplomatique*.
- Cantamutto, F. J., Schorr, M., & Wainer, A. (2016). El sector externo de la economía argentina durante los gobiernos del kirchnerismo (2003-2015). *Realidad Económica*, 304, 41–73.
- Cantamutto, F. J., & Wainer, A. (2013). *Economía política de la convertibilidad. Disputa de intereses y cambio de régimen*. (J. Nun, Ed.). Buenos Aires: Capital Intelectual.
- CEPAL. (2012). *Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo*. Santiago de Chile.
- Chang, H.-J. (2002). *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*. Anthem Press.
- CIFRA. (2016). *La naturaleza política y económica de la alianza Cambiemos* (Documento de Trabajo 15). Buenos Aires.
- CIFRA. (2017). *Informe de Coyuntura 23*. Buenos Aires.
- CIFRA. (2018a). *El balance laboral de los dos primeros años del gobierno de Cambiemos: menos empleo, menor registración, menores salarios*. Buenos Aires. Retrieved from <http://www.centrocifra.org.ar/docs/El balance laboral de Macri.pdf>
- CIFRA. (2018b). *Informe de Coyuntura 26*. Buenos Aires. Retrieved from <http://www.centrocifra.org.ar/docs/rt.pdf>
- Fernández Bugna, C., & Porta, F. (2007). El crecimiento reciente de la industria argentina. Nuevo régimen sin cambio estructural. In B. Kosacoff (Ed.), *Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007* (pp. 63–107). Santiago de Chile: CEPAL.
- Furtado, C. (1964). *Desarrollo y Subdesarrollo*. Buenos Aires: Eudeba.
- Gaggero, A., Gaggero, J., & Rúa, M. (2015). Principales características e impacto macroeconómico de la fuga de capitales en Argentina. *Problemas Del Desarrollo*, 182(46), 67–89.
- Gaggero, A., Schorr, M., & Wainer, A. (2014). *Restricción eterna: el poder económico durante el kirchnerismo*. Buenos Aires: Futuro Anterior.
- Gaggero, J., Rúa, M., & Gaggero, A. (2013). Argentina. fuga de capitales (2002-2012). En *BEPS and the future of corporate taxation* (pp. 1–40). London: City University.
- Katz, J., & Bernat, G. (2013). Interacciones entre la macro y la micro en la post convertibilidad: dinámica industrial y restricción externa. *Desarrollo Económico*, 52 (207–208), 383–404.

- Manzanelli, P., González, M., & Basualdo, E. (2017). La primera etapa del gobierno de Cambiemos. El endeudamiento externo, la fuga de capitales y la crisis económica y social. In Basualdo, E. (ed.), *Endeudar y fugan. Un análisis de la historia económica argentina, de Martínez de Hoz a Macri* (1ra ed., pp. 179–220). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Marini, R. M. (1973). *Dialéctica de la dependencia*. México: Era.
- Marx, K. (2000). *El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*. Buenos Aires: Siglo Veintiés.
- Piva, A. (2017). La épica de un país ordenado. En torno a la caracterización del gobierno Cambiemos. *Contrahegemonía Web*. Retrieved from <http://contrahegemoniaweb.com.ar/la-epica-de-un-pais-ordenado-en-torno-a-la-caracterizacion-del-gobierno-cambiemos/>
- Rabinovich, J. (2018). Grupos locales y acumulación de capital en el sector de electrónica de consumo en Argentina (2003-2014). *Apuntes del CENES*, 37 (65). <https://doi.org/3/01203053.v37.n65.2018.5899>
- Sabbatella, I. (2017). *Una introducción al tarifazo energético* (Análisis 17). Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert. Retrieved from <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/13397.pdf>
- Schorr, M. (2013). *Argentina en la posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial?* *Estudios de economía política*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Schorr, M. (2018). El poder económico de la Argentina bajo los gobiernos del kirchnerismo. Un análisis a partir del panel de grandes empresas. In M. Schorr (Ed.), *Entre la década ganada y la década perdida. La Argentina kirchnerista. Ensayos de economía política*. Buenos Aires: Batalla de Ideas.
- Schorr, M., & Porcelli, L. (2014). *La industria electrónica de consumo en Tierra del Fuego. Régimen promocional, perfil de especialización y alternativas de desarrollo sectorial en la posconvertibilidad* (Documentos de Investigación Social 26). Buenos Aires.
- Schorr, M., & Wainer, A. (2014). La economía argentina en la posconvertibilidad: problemas estructurales y restricción externa. *Realidad Económica*, 286, 137–174.
- Wainer, A. (2011). Inserción argentina en el comercio mundial. De la restricción externa al desarrollo económico. *Realidad Económica*, 264, 60–88.
- Wainer, A., & Schorr, M. (2014). Concentración y extranjerización del capital en la Argentina Reciente: ¿Mayor autonomía nacional o incremento de la dependencia? *Latin American Research Review*. Retrieved from http://lasa-4.univ.pitt.edu/LARR/prot/fulltext/Vol49no3/49-3_103-125_Wainer-Schorr.pdf
- Zaiat, A. (2015). La CEOcracia. *Página 12*. Retrieved from <https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-287680-2015-12-06.html>